

# COMUNA DE SAN JERONIMO SUD c/ TELECOM ARGENTINA S.A. -APREMIO FISCAL COMUNAL- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Cita: 224/26

Nº Saij:

Nº expediente:

Año de causa:

Nº de tomo: 2026

Pág. de inicio: 0

Pág. de fin: 0

Fecha del fallo: 14/04/2026

Juzgado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Santa Fe) - Santa Fe

Jueces

Jorge Camilo BACLINI

Roberto Héctor FALISTOCCO

Rafael Francisco GUTIERREZ

Eduardo Guillermo SPULER

Rubén Luis WEDER

Margarita Elsa ZABALZA

## Jurisprudencia relacionada

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA c/ TELECOM ARGENTINA S.A. -APREMIO FISCAL MUNICIPAL- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 13/06/2023; Fuente Propia; ; 473/23

COMUNA DE SAN JERONIMO SUD c/ TELECOM ARGENTINA S.A. -APREMIO FISCAL COMUNAL- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 11/08/2025; Fuente Propia; ; 529/25

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > PROCEDENCIA > FUNDAMENTOS INSUFICIENTES

Tesouro > SENTENCIA > FUNDAMENTOS INSUFICIENTES

Tesouro > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL > JURISPRUDENCIA > APARTAMIENTO

Tesouro > JURISPRUDENCIA > APARTAMIENTO

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION CONSTITUCIONAL > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL. JURISPRUDENCIA. APARTAMIENTO

Tesouro > TELECOMUNICACIONES

Tesouro > TELECOMUNICACIONES. COMPETENCIA FEDERAL

Tesouro > INTERPRETACION DE LEYES FEDERALES

Tesouro > COMPETENCIA FEDERAL

CONSTITUCIONAL - PROCESAL

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDENCIA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL. JURISPRUDENCIA. APARTAMIENTO. TELECOMUNICACIONES. INTERPRETACION DE NORMAS FEDERALES. COMPETENCIA FEDERAL.



de deuda por Tasa de verificación por emplazamiento estructuras-soporte de antenas, con más intereses y costas a la vencida, dedujo la empresa perdidosa su recurso de inconstitucionalidad.

Denegada la concesión del recurso por el A quo, la recurrente logró su apertura a través de la queja deducida ante esta Corte (registrada en A. y S. Nro. 529, año 2025).

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, encuentro que no existen razones para apartarse del criterio sustentado para abrir la queja -rechazo de la excepción de incompetencia y denegatoria del fuero federal-, lo que me conduce a confirmar dicha conclusión y declarar admisible el remedio extraordinario interpuesto.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Baclini, la señora Ministra doctora Zabalza, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Weder y Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

1. La materia litigiosa puede resumirse así:

1.1. Surge de las constancias de autos que la Comuna de San Jerónimo Sud inició apremio fiscal por cobro de la suma de \$580.608.- contra Telecom Argentina S.A., en concepto de deuda correspondiente a la tasa de verificación por emplazamiento de estructuras-soporte de antenas perteneciente a la zona urbana de la localidad de San Jerónimo Sud, conforme surge de la liquidación de deuda acompañada a fojas 4/16 como título ejecutivo, solicitando traba de embargo.

Citada de remate la demandada, compareció Telecom Argentina S.A. y opuso excepciones de incompetencia e inhabilidad de título, negando la deuda que calificó de inexistente e inexigible.

En cuanto al planteo de incompetencia de la justicia local para entender en el apremio señaló que la controversia debe ser dirimida ante los estrados federales, en virtud de que las comunicaciones interestatales están sujetas a la jurisdicción nacional exclusivamente ya que constituyen ejercicio del comercio y forman parte del sistema del correo, peticionando que se declare la incompetencia del fuero local.

Respecto a la excepción de inhabilidad de título, fundó la misma en la falta de individualización en el mandamiento de intimación de pago notificado y del proceso administrativo hecho para determinar el monto. Agregó que no sabe cuáles son los períodos

reclamado y que lo notificado no contenía certificado de deuda ni título ejecutivo.

Adujo la inexistencia de deuda por falta de causa, con cita de precedentes de la Corte nacional y argumentó que el debate sobre la causa es a los fines de corroborar la legitimidad del procedimiento (formación del título) y no la legitimidad causal.

Alegó violación del principio de reserva de la ley, falta de publicación de las ordenanzas en el boletín oficial y subsidiariamente planteó la inexigibilidad de la deuda.

Por último, postuló la inconstitucionalidad de la tasa reclamada, puesto que las tareas de control a que refiere la tasa, corresponden exclusivamente al ENRE, existiendo además una exención expresa en el artículo 39 de la ley 19798.

1.2. Por su parte, en fecha 17 de septiembre de 2024, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de San Lorenzo rechazó las excepciones interpuestas por la accionada y ordenó llevar adelante la ejecución hasta tanto la actora perciba de la demandada íntegramente la suma reclamada, intereses legales conforme la normativa específica provincial, desde la mora hasta el efectivo pago, con costas.

Para así decidirlo, señaló el marco limitado de la ejecución fiscal y consideró: "Que en relación a la incompetencia, la misma se excepciona en base a considerar se está regulando y cobrando por cuestiones de telecomunicaciones, cuando en rigor se trata de normativa local como reconoce, por servicios locales, como también reconoce, solo que etiqueta de no prestado el servicio, de precio caro ilegalmente, y existir violación de normas nacionales, transformando el cobro en ilegal. Entendemos que el sustento argumental depende de calificativos de la parte, cuando debe basarse en hechos, y los mismos están reconocidos como de origen local, a los que se le atribuyen muchos defectos, pero se les reconoce el ámbito local (ordenanza de la actora y ley provincial 5066), siendo ello suficiente para rechazar el planteo de incompetencia".

Seguidamente, juzgó en cuanto a la excepción de inhabilidad de título que "conforme lo que consta la normativa invocada por la ejecutante, aparece adecuada la emisión del título bajo un concepto fundado en ley en sentido amplio, por más que el concepto abarque diferentes tareas o partes de hecho imponible (hecho imponible uso de suelo vs. Inspección de estructuras de antenas), que no se está en necesidad de detallar en la forma en que reclama la excepcionante. De ahí la inhabilidad no prospera para la ejecución. Es preciso entender que la Nación no ha declarado 'intocable' el desarrollo de la actividad de telecomunicaciones, ni ha privado expresamente a las comunas del ejercicio de su actividad en su esfera legalmente delimitada. Ni la misma excepcionante sostiene que nada lo debe afectar, pero entiende que esta tasa no la

debería hacer. Es la interpretación de la norma, la que hace de base de las excepciones entendiendo que aquí nos enfocamos en los pagos de una específica tasa por un concepto si se quiere físico, estructural, que hace a la seguridad pública local, es decir en extrema simplificación, que no se caigan los soportes de antenas, resultando en extremo difuso y débil lo dicho sobre la superposición con otro organismo, sin siquiera adentrarse a intentar probar dicha coincidencia, la cual por el solo hecho de su duplicidad no la transforma automática y notoriamente en ilegal y afectante en las telecomunicaciones, con lo cual no advertimos debate profundo y medular sobre la cuestión en la propuesta de discusión de la excepcionante, que haga nacer la necesidad de admitir esas cuestiones en este tipo de debate".

1.3. Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada Telecom Argentina S.A. su recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055, alegando la afectación de sus derechos y garantías constitucionales (art. 1, inc. 2, ley 7055) e invocando arbitrariedad de sentencia por no reunir el decisorio las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia de Santa Fe (art. 1, inc. 3, ley 7055).

Afirmó que la cuestión constitucional está dada por la convalidación del pronunciamiento impugnado de la improcedente pretensión fiscal de la Comuna, consistente en el reclamo por vía ejecutiva de una deuda en concepto de tasa de verificación por emplazamiento de estructuras-soporte de antenas inexistente e inexigible, como consecuencia entre otras cuestiones, de la ilegitimidad y arbitrariedad reflejada en la preparación del título ejecutivo, lo que configura una arbitrariedad y una grave lesión concreta y directa al derecho de defensa de su parte, al derecho de propiedad, al principio de legalidad y de reserva de la ley, la garantía de seguridad jurídica y buena fe de la Administración.

Destacó que se encuentra en juego la interpretación y alcance de normas federales como la Ley Nacional de Telecomunicaciones y la Ley Argentina Digital, que regulan la actividad federal de telecomunicaciones que brinda.

Señaló que el Juez no analizó correctamente la excepción de incompetencia ya que la justicia provincial no resulta competente para conocer en esta causa, toda vez que la pretensión de la Comuna consiste en ejecutar una presunta deuda en concepto de tasa de verificación por emplazamiento de estructuras soporte de antenas, invadiendo el ámbito de competencia propio de la Nación en materia de telecomunicaciones.

Alegó que tanto la Ley Nacional de Telecomunicaciones como la Ley Argentina Digital resultan aplicables a este apremio y que es claro que la pretensión de la Comuna interfiere el servicio federal de alcance interjurisdiccional que presta Telecom Argentina S.A., servicio

cuyo conocimiento queda reservado a las autoridades federales.

Planteó que la sentencia yerra al analizar la defensa de inhabilidad de título, ya que -entiende- la deuda reclamada resulta manifiestamente inexistente e inexigible.

Asimismo, respecto de la causal prevista en el punto 3) del artículo 1 de la ley 7055, alegó que la sentencia incurrió en arbitrariedad manifiesta por contener afirmaciones dogmáticas insuficientes para apartarse de la jurisprudencia aplicable e incurrió en injustificado rigorismo formal al convalidar la deuda manifiestamente inexistente con pretexto en el acotado marco que brindan las normas que regulan la ejecución fiscal.

Afirmó a ese respecto que la Comuna dedujo el presente apremio sin iniciar el correspondiente procedimiento de determinación de oficio de la ley 8173 y que el fallo cuestionado no tuvo en consideración que las normas que legislan el tributo pretendido no fueron en su totalidad publicadas en el Boletín oficial.

Por último, postuló que no se acreditó la efectiva prestación del servicio, ya que ningún inspector comunal ha realizado inspección alguna, ni demostrado la Comuna que hubiese prestado algún servicio y aunque el Ente comunal hubiese demostrado la existencia de prestación, la misma resultaría igualmente improcedente por cuanto carece de facultades para inspeccionar la infraestructura de telecomunicaciones.

1.4. Mediante resolución de fecha 12 de febrero de 2025 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de San Lorenzo denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad deducido. Dicha decisión motivo la presentación directa de Telecom Argentina S.A. por ante esta Corte, que tal como se adelantó "ut supra", fue admitida en fecha 11 de agosto de 2025, mediante resolución registrada en A. y S. Nro. 529, año 2025.

2. Las circunstancias del caso traído a consideración por la compareciente, resultan sustancialmente análogas a las consideradas y decididas por esta Corte in re "MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA contra TELECOM ARGENTINA S.A. -APREMIO FISCAL MUNICIPAL- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-25022233-2)" del 13.06.2023 a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y adoptar para la especie idéntica solución.

En efecto, la presente controversia debe examinarse a la luz de la jurisprudencia de la Corte nacional en tanto requiere determinar el órgano jurisdiccional competente para la aplicación de normas federales que regulan el régimen federal de telecomunicaciones, cuestión sobre la cual ha sentado doctrina constitucional consolidada (Fallos:344:1451; 329:4478; 327:3883; 320:162; 320:619).

Cabe recordar al respecto que in re "Comuna de Hughes contra Telefónica de Argentina S.A. s/ apremio" (21.09.2004) el Alto Tribunal nacional intervino en un conflicto negativo de competencia originado en la demanda de apremio promovida por la Comuna de Hughes, Provincia de Santa Fe, contra Telefónica Argentina S.A., tendiente a obtener el cobro de los derechos de utilización del espacio aéreo, previstos en leyes provinciales y en diferentes ordenanzas municipales y determinó que resultaba competente para entender en un apremio el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de la ciudad de Rosario, resolviendo de acuerdo con lo expuesto por el Procurador Fiscal que expuso "Cabe recordar que la competencia federal por razón de la materia es improrrogable por su propia naturaleza y no puede ser alterada por la voluntad de los litigantes. Su aplicación ha de ser sostenida aún de oficio cuando sea alterada voluntariamente o inconscientemente y debe ser declarada en cualquier estado del proceso (Fallos:122: 408; 132:230; 314:1076, entre otros)" ... "En tales condiciones, si bien en el sub judice el Municipio actor ejecuta a un particular con fundamento en normas de derecho público local, se advierte que tal pretensión exige -esencial e ineludiblemente- determinar, en forma previa, si el ejercicio de esas facultades tributarias invade un ámbito de competencia que es propio de la Nación en materia de telecomunicaciones (Fallos:320:162, 619)" "...Tal circunstancia, en mi criterio, implica que la causa se encuentre entre las especialmente regidas por la Constitución, a las que alude el art. 2, inc. 1, de la ley 48, ya que versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las jurisdicciones locales y el Gobierno Federal que determina nuestra Ley Fundamental, lo que torna competente a la justicia nacional para entender en ella (Fallos:308:610; 310:877; 311:919; 313:127; 314:508; 315:1479; 322:2624) ... pues lo medular del planteamiento que se efectúa remite, necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798, de carácter federal (Fallos: 320:162), cuya adecuada hermenéutica resulta esencial para la justa solución de la controversia (Fallos:311:2154; 314:1076)".

Conforme a estos lineamientos del Máximo Tribunal, cabe concluir que la aplicación de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798 (ratificada por Ley Argentina Digital 27078 y su normativa reglamentaria), de neto corte federal, para juzgar la pretensión de la recurrente, determina la detracción de la competencia ordinaria y la habilitación de la competencia federal.

Esto impone la descalificación de la sentencia impugnada en tanto, bajo la fundamentación de que la tasa de verificación por emplazamiento estructuras-soporte de antenas no estaba regulando y cobrando por cuestiones de telecomunicaciones sino que se "trataba de normativa

local por servicios locales" el Juzgador se apartó de la interpretación de las normas en juego y desechó la excepción de incompetencia planteada, apartándose de la doctrina constitucional sentada por la Corte nacional (Fallos:327:3883; 329:4478), que en el caso asume el carácter de "intérprete final de la Constitución" (Fallos:1:340).

Debe recordarse la tradicional jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación en el sentido de que, sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos "no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos" (cfr. doc. de Fallos:25:364). De esa doctrina y la de Fallos:212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (cfr. causa: "Balbunea, César Aníbal sobre Extorsión", resuelto el 17 de noviembre de 1981; "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", Fallos:307, Vol. 1, pág. 1094).

En definitiva, la sentencia de apremio ignora y se aparta injustificadamente de la jurisprudencia de la Corte nacional que ratifica la improcedencia de apremios como el presente.

Lo dicho hasta aquí basta para juzgar procedente el recurso interpuesto tornándose inoficioso ingresar al análisis de otras cuestiones, desde que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para evidenciar que la sentencia impugnada no cumple con las exigencias constitucionales e impiden su mantenimiento como acto judicial válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Baclini, la señora Ministra doctora Zabalza, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Weder y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.



A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Baclini, la señora Ministra doctora Zabalza, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Weder y Spuler dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, de lo que doy fe.

FDO. DIGITALMENTE: GUTIÉRREZ - BACLINI - FALISTOCCO - SPULER - WEDER - ZABALZA - PORTILLA (SECRETARIA)

Tribunal de origen: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de San Lorenzo.